**PROYECTO DE LEY \_\_\_\_\_\_ 2019 CAMARA**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER”**

**EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:**

**CAPÍTULO I**

**EL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER**

**ARTÍCULO 1. NATURALEZA:** Créase el Ministerio de la Familia y de la Mujer como organismo principal de la administración pública del nivel central y rector del sector familia y de la mujer.

**ARTÍCULO 2. OBJETO**. El Ministerio de la Familia y de la Mujer, como ente rector de la política pública de la Protección Integral a la familia y la mujer en coordinación con las demás entidades y organismos competentes; tendrá como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos, como cabeza del Sector Familia y de la mujer, garantizando la protección de la mujer, el bienestar social de la familia, y la calidad de vida de cada uno de sus integrantes.

**ARTÍCULO 3.** **DEFINICIÓN.** Para efectos de la interpretación del contenido y alcance de la presente ley, la familia es el núcleo esencial de la sociedad, constituida por una o más personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto, la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros y/o integrantes más próximos.

**CAPITULO II**

**INTEGRACION DEL SECTOR**

**ARTÍCULO 4.** El Sector Familia y de la Mujer, está integrado por el Ministerio de la Familia y de la Mujer, el cual tendrá los siguientes viceministerios:

1. Viceministerio de la Mujer
2. Viceministerio de la Inclusión social
3. Viceministerio de la Infancia, Adolescencia y Juventud

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hará parte del Sector Familia y de la Mujer, así como todas aquellas entidades que promuevan la protección integral de la familia y la mujer.

**ARTÍCULO 5. ENTIDADES ADSCRITAS.**  Quedará en cabeza del Ministerio de la Familia y de la Mujer como entidad adscrita, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

**ARTÍCULO 6. TRASLADESE DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.**Trasládese del Departamento para la Prosperidad Social las funciones, programas y proyectos asignados por las normas vigentes en temas relacionados con la protección y bienestar de la familia y la mujer. Estas serán determinadas por el gobierno nacional y asumidas por el Ministerio de la Familia y de la Mujer.

**ARTÍCULO 7**. **REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**Reorganícese el Departamento para la Prosperidad Social, el cual continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a el traslado de que trata el artículo 6° de la presente ley.

**ARTÍCULO 8.** Con las funciones asignadas por la ley, transfórmese la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; y la Dirección de Mujer Rural del Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Viceministerio de la Mujer.

**ARTÍCULO 9.** Con las funciones asignadas por la ley, transfórmese la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, en el Viceministerio de la Inclusión Social.

**ARTÍCULO 10**. Con las funciones asignadas por la ley, transfórmese la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, en el Viceministerio de la Infancia, Adolescencia y Juventud.

**ARTÍCULO 11. ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE FAMILIA Y DE LA MUJER.** La estructura del Ministerio de la Familia y de la Mujer será la siguiente**:**

1. **Despacho del Ministro**
   1. Oficina de Control Interno
   2. Oficina Asesora de Planeación
   3. Oficina Jurídica
   4. Comité Ejecutivo del Ministerio de Familia y de la Mujer, y sus representantes de los Consejos de Política Social, uno por cada RAP.

**2**. **Despacho del** **Viceministro de la Mujer**

2.1Dirección de Mujer Rural

2.1 Dirección de empoderamiento femenino e igualdad de género.

2.2 Dirección de empoderamiento económico y político.

2.3. Dirección de Violencia de Género

**3. Despacho del Viceministro de la Infancia, Adolescencia y Juventud**

3.1. Dirección Primera Infancia

3.2. Dirección de Adolescencia y Juventud

**4. Despacho del Viceministro de la inclusión social**

4.1. Dirección del Adulto Mayor y sus cuidadores

4.2. Dirección de las Personas con Discapacidad y sus Cuidadores

4.3. Dirección comunidad LGBTI

**CAPITULO III**

**DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER**

**ARTÍCULO 12. FUNCIONES GENERALES**: Serán funciones generales del Ministerio de la Familia y de la Mujer, y de los correspondientes viceministerios las siguientes:

1. El Ministerio de la Familia y de la Mujer, tiene como objetivo, formular, adoptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de familia y mujer, asegurando la eficiencia y eficacia de la inversión y del gasto público social, para promover su protección con estricta sujeción a lo establecido en la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Colombia.
2. Organizar, distribuir y reasignar las competencias de diseño, planificación, ejecución y evaluación de la política pública del Sector Social, en la nueva institucionalidad del Ministerio de la Familia y de la Mujer y las demás instancias afines.
3. Coordinar y fomentar la integración funcional de las entidades adscritas y vinculadas a este ministerio, para que todas sean ejecutoras permanentes de políticas públicas de fortalecimiento y protección integral de la familia.
4. Articular la Política Pública de la Familia con las políticas transversales de los sectores afines al sector Familia.
5. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas que protejan la familia y la mujer.
6. Crear y asegurar la atención con enfoque poblacional en ámbitos de desarrollo de programas sociales.
7. Garantizar la prevención, atención y seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar.
8. Formular políticas públicas para el emprendimiento familiar y de la mujer.
9. Formular una política pública con apoyo de las universidades y las entidades públicas y privadas para la prevención del suicidio en el entorno familiar.
10. Establecer lineamientos generales sobre la regulación y procedimientos de la prestación de los servicios asistenciales, de protección y formación en materia de familia y mujer.
11. Celebrar directamente convenios o contratos con entidades u organismos internacionales o nacionales, públicos o privados para el desarrollo de su objeto, de acuerdo con las normas legales vigentes.
12. Proponer, incentivar, desarrollar y fortalecer, en el marco de sus competencias, la investigación científica y estudios técnicos en torno a entender, analizar, evaluar las problemáticas que afectan a la familia y en especial a los grupos de personas vulnerables que la integran: niñez, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad, comunidad LGBTI y mujer, en materia económica, social, política y cultural, con el objeto de formular e implementar políticas públicas, planes, programas y proyectos que permitan fortalecer, y proteger a la familia como núcleo esencial de la sociedad.
13. Adelantar programas, proyectos, acciones afirmativas y políticas prioritarias enfocadas a la protección de la mujer, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adulto mayor, grupos étnicos y población LGBTI.
14. Definir y establecer los instrumentos administrativos y técnicos para hacer efectiva la protección, emprendimiento y formación integral de la familia.
15. Promover, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, las gobernaciones y las alcaldías, programas y estrategias para la creación y funcionamiento de centros de servicios, para la rehabilitación de consumidores de sustancias psicoactivas pertenecientes a familias de escasos recursos.
16. Brindar asistencia técnica a los entes departamentales, distritales y municipales para la formulación de planes y la ejecución de proyectos relacionados con el sector familia y de la mujer.
17. Apoyar la consecución de recursos económicos y logísticos, así como establecer criterios de cofinanciación frente a los planes y programas que correspondan a las políticas públicas en materia del sector familia y de la mujer.
18. Administrar los recursos que destine el Gobierno Nacional para promover la sostenibilidad financiera del sector familia, cuando quiera que no exista norma especial que los regule o reglamente, ni la administración se encuentre asignada a otra entidad.
19. Implementar políticas públicas en materia de igualdad, incorporando una perspectiva de género, que apoye promueva y prevea el cumplimiento de programas, proyectos y acciones para la igualdad de estos en el núcleo familiar.
20. Formular, implementar y establecer políticas sobre la regulación de procedimientos administrativos y jurisdiccionales de las comisarías de familia, asimismo emitir lineamientos generales que regulen el buen funcionamiento de su marco competencial.
21. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos y entidades que conformen el sector familia, así como de las comisarías de familia.
22. Coordinar, junto con el Ministerio del Deporte, la formulación de planes y programas que promuevan el desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de la juventud a través de la correcta utilización del tiempo libre, el deporte y la recreación, como elementos fundamentales para la prevención, disminución de la violencia en edades tempranas, así como también para el fortalecimiento en su proceso de formación integral tanto en lo personal como en lo social.
23. Fomentar programas de mayor cobertura poblacional, en los temas de su competencia, que generen impacto en la sociedad.
24. Las demás que le sean asignadas por la ley.

**ARTÍCULO. 13 FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LA MUJER.** Serán funciones del Viceministerio de la Mujer además de las asignadas en el artículo 8 de la presente ley, las siguientes:

1. Fomentar el empoderamiento económico de la mujer para garantizar su autonomía e igualdad.
2. Impulsar de manera efectiva la Política Pública de Prevención de la violencia contra la mujer.
3. Coordinar políticas integrales que fomenten la equidad de género, con el fin de garantizar los derechos de la mujer.
4. Garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para   
   Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (ConvenciónBelem do Pará), y todos aquellos tratados y convenios ratificados por el Estado colombiano, que propugnen por el respeto de la dignidad humana, la integridad física, la salud, la educación, la seguridad personal y que fomenten una vida sin violencia y discriminaciones**.**
5. Orientar y participar en el diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación y de los tratados, convenios y acuerdos internacionales en el orden interno, que se relacionen con la igualdad de género para las mujeres**.**
6. Garantizar de manera prioritaria, medidas enfocadas a la protección de los derechos de la mujer y la equidad de género, garantizando condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
7. Asistir y proponer al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República, al Secretario General de la Presidencia, al Gobierno Nacional y a las Entidades territoriales el diseño de las políticas, planes, programas, proyectos y disposiciones necesarias destinadas a promover la igualdad de género y empoderamiento para las mujeres, así como velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las mismas.
8. Desarrollar programas de capacitación para la mujer rural en emprendimiento y productividad sostenible.
9. Coordinar, diseñar y evaluar las políticas, planes, y proyectos integrales de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a la provisión de bienes públicos rurales, que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales.
10. Propiciar la articulación con las entidades del orden nacional y territorial para la implementación de planes y proyectos integrales de desarrollo rural y agropecuario para la mujer rural.
11. Proponer normas, instrumentos y procedimientos diferenciales para las mujeres rurales que permitan el acceso y la provisión de bienes públicos rurales.
12. Suministrar y analizar la información requerida para el diseño de políticas e instrumentos diferenciales para la mujer rural.
13. Coordinar con la Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los desarrollos tecnológicos y necesidades informáticas que se requieran en el ejercicio de sus funciones.
14. Promover los programas a su cargo y potencializar los recursos, mediante alianzas o esquemas de cooperación entre el Estado, la comunidad y el sector privado.
15. **I**dentificar y coordinar la implementación de los cambios normativos, procedimentales e institucionales que se requieran para el logro de los objetivos y metas de la política de gestión de bienes públicos rurales para las mujeres rurales**.**
16. Establecer alianzas estratégicas con otros sectores de Gobierno, así como con el sector privado, organizaciones de mujeres, organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales -ONG, universidades y centros de investigación, para la implementación de la política pública de género.
17. Diseñar e impulsar estrategias culturales y de comunicaciones para promover la igualdad de género para las mujeres y su empoderamiento.

**ARTÍCULO 14. FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.** Serán funciones del Viceministerio de Infancia, Adolescencia y Juventud además de las asignadas en el parágrafo del artículo 10 de la presente ley, las siguientes:

1. Reconocer los niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección constitucional reforzada, garantizando su dignidad e integridad por medio de políticas públicas de atención, asistencia y apoyo cuando sus derechos tengan que ser protegidos o restablecidos.
2. Garantizar todos los derechos reconocidos por la convención sobre los derechos del niño, y todos aquellos tratados y convenios ratificados por el Estado colombiano, que propugnen por el respeto de la dignidad humana, la integridad física, la salud, la educación, la seguridad personal y que fomenten una vida sin violencia y discriminaciones.
3. Fijar políticas transversales de atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes, que propugne por la protección efectiva de sus derechos.
4. Aumentar la seguridad alimentaria y la correcta nutrición de todos los niños, niñas y adolescentes.
5. Formular, en coordinación con las entidades públicas y privadas, programas, proyectos y actividades en favor de la nutrición y el desarrollo de los niños y niñas.
6. Ejecutar y vigilar políticas transversales de atención integral cualificada (educación, salud, nutrición y cuidado) a la niñez, en coordinación con las entidades nacionales y territoriales competentes.
7. Erradicar en todas sus formas el trabajo infantil.
8. Prevenir los embarazos en la adolescencia.
9. Prevenir el consumo de drogas y alcohol en la infancia y adolescencia.
10. Apoyar y supervisar la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar familiar, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
11. Asesorar y asistir al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las acciones que promueven la generación de oportunidades para la infancia y la adolescencia, para el goce efectivo de sus derechos.
12. Brindar asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios en la formulación, implementación y seguimiento de sus políticas para la garantía de los derechos de niños, niñas y jóvenes.
13. Generar alianzas con organismos y entidades nacionales e internacionales, de carácter público, privado y mixto para la formulación de políticas y programas para cumplimiento de la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, así como propender la transición armónica a la juventud, garantizando siempre el cumplimiento de los derechos de la niñez y la juventud.
14. Articular, con las demás entidades competentes, estrategias para la consecución de recursos públicos, privados y de cooperación internacional, destinados para el cumplimiento de la política de Cero a Siempre.
15. Fomentar en los niños, niñas y adolescentes en coordinación con las entidades del orden nacional y territorial, el uso eficiente del tiempo libre mediante herramientas y espacios lúdicos que conserven un componente educativo.
16. Propender por el fortalecimiento de sistemas de monitoreo, evaluación y seguimiento de las acciones implementadas por las entidades miembros de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia.
17. Promover en coordinación con las demás entidades competentes, en el marco de la CIPI, las estrategias que faciliten el acceso de los niños y niñas a los servicios de nutrición ofrecidos por las entidades gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de que mejoren su formación integral y su calidad de vida.
18. Orientar y coordinar con las entidades competentes, políticas públicas que permitan el acceso con calidad y equidad de los niños, niñas y adolescentes a las actividades en favor de la nutrición, desarrollo y en lo relacionado con la garantía y el goce efectivo de sus derechos.
19. Presidir, coordinar y ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia.
20. Ejercer la secretaría técnica del Comité Técnico Ampliado de la Comisión Intersectorial para la atención integral para la Primera Infancia.
21. Dirigir el Sistema Nacional de Juventud de acuerdo con los principios y disposiciones contenidas en la [Ley 1622 de 2013](http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685451) y garantizar el cumplimiento sus funciones.
22. Facilitar a los jóvenes el conocimiento y el acceso a la oferta institucional del Estado en materia juventud, a través de la implementación de estrategias que hagan visibles los beneficios de los planes y programas previstos por las distintas entidades estatales para garantizar su formación integral y calidad de vida.
23. Generar espacios de interlocución continua entre el Estado y los jóvenes, en los que la juventud pueda expresar sus puntos de vista, necesidades, perspectivas y participar de manera activa en el diseño e implementación de políticas públicas que les conciernen.
24. Formular programas, proyectos y actividades en favor de la juventud en coordinación con las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, que propendan por garantizar los derechos a la salud, a gozar de ambientes sanos e idóneos, cultura, deporte y tecnología.
25. Fomentar en los jóvenes, a través de la implementación de políticas públicas y en coordinación con las entidades territoriales, la importancia que tiene la participación política en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de sus proyectos de vida y de un país donde los ciudadanos conservan la confianza en su institucionalidad.
26. Brindar a la juventud herramientas que permitan su inserción en el mercado laboral, el acceso al primer empleo en condiciones dignas e igualitarias, la proscripción de la falta de experiencia como causal de discriminación y la eliminación de obstáculos que impidan su interacción con diversas oportunidades laborales que consideren su vocación y aptitudes.
27. Formular estrategias de seguimiento y evaluación a las políticas públicas existentes en materia de juventud con el propósito de analizar su conveniencia y avance.
28. Asistir al Gobierno Nacional en la organización y desarrollo de un programa especial de apoyo al Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de Juventud y a los Consejos Distritales, Municipales y Locales de juventud, en los términos de la ley 16622 de 2013.
29. En su calidad de dependencia rectora del Sistema Nacional de Juventudes, ejercer la Secretaría técnica de la Comisión de Concertación y Decisión Nacional del Sistema Nacional de Juventudes, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.
30. Administrar el portal de juventud que incluirá información de oferta y demanda de servicios para garantía de los derechos expresados en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
31. Administrar el Sistema Nacional de Información y Gestión de Conocimiento en Adolescencia y Juventud SNIGCAJ
32. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente de la República.

**ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.** Serán funciones del Viceministerio de la inclusión social, además de las asignadas en el parágrafo del artículo 9 de la presente ley, las siguientes:

1. Garantizar todos los derechos reconocidos por laConvención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana Sobre Derechos de las Personas Mayores.
2. Corresponderá al Ministerio de la Familia y de la Mujer, mediante el Viceministerio de la Inclusión Social, la evaluación de la ejecución de la política nacional de envejecimiento y vejez.
3. Apoyar al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud y Protección Social, para Incrementar la cobertura de los programas del Sistema de Protección a la Vejez.
4. Crear el Sistema Nacional del Adulto Mayor y el envejecimiento.
5. Promocionar y defender los derechos humanos y libertades fundamentales del adulto mayor, además propugnar por su participación, integración, respeto e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
6. Apoyar a la planificación de los insumos y recursos requeridos para la correcta ejecución de los planes, programas, proyectos y servicios del área de su competencia.
7. Realizar estudios, análisis e investigaciones, sobre promoción, prevención, protección integral y restitución de derechos para orientar la formulación de políticas planes, programas y proyectos que respondan a las condiciones, necesidades y características de la población adulta.
8. Implementar programas para la prevención del abandono del adulto mayor.
9. El Ministro de Familia o quien él delegue será miembro del Consejo Nacional del Adulto Mayor.
10. Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos destinados a los programas y servicios para los adultos mayores.
11. Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos al adulto mayor que sean ejecutados por las instituciones públicas o privadas.
12. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez incluirá medidas tendientes a promover la organización de la familia e involucrarla en el desarrollo integral de los adultos mayores que la conforman, propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.
13. Incidir de manera activa, a nivel intersectorial y territorial sobre las condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que las personas alcancen una vejez digna, saludable e integrada, dentro del marco de la promoción, prevención y restitución de los derechos humanos.
14. Crear condiciones para el envejecimiento de la población, entendido como el derecho de toda la población a una vida digna, larga y saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y social en este proceso.
15. Promover, desarrollar y garantizar los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de las personas mayores y crear condiciones que garanticen su seguridad económica, satisfagan las necesidades fundamentales y mejoren su calidad de vida.
16. Garantizar condiciones de protección social integral para la población adulta mayor.
17. Promover un envejecimiento activo que garantice condiciones de autonomía, integración, seguridad y participación efectiva de la población en todo su ciclo de vida.
18. Movilizar, coordinar y articular las acciones intersectoriales en torno a la Protección Social Integral de las personas mayores y a la garantía de una vida digna.
19. Promover un país incluyente, solidario y equitativo para todas las personas mayores con especial énfasis en extrema pobreza y alta vulnerabilidad social.
20. Creación y promoción de una cultura del Envejecimiento.
21. Desarrollar estrategias e intervenciones tendientes a transformar la imagen de la vejez con estereotipos inadecuados, por aquellos que rescaten el valor de las personas mayores y de la vejez.
22. Brindar reconocimiento y protección especial a las personas que tengan a su cargo el cuidado de personas con discapacidad múltiple, con el fin de brindarles mayores garantías en sus proyectos de vida.
23. Ejecutar la Política Nacional de Discapacidad por la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores.
24. Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de protección constitucional reforzada y desarrollar políticas públicas progresivas que favorezcan su desarrollo integral y el pleno goce de sus derechos humanos.
25. Apoyar a la Presidencia, Vicepresidencia de la República y Secretario General de la Presidencia en la orientación y coordinación con las entidades competentes, para la formulación e implementación de las diferentes políticas públicas de discapacidad, en el marco de la agenda de desarrollo sostenible - ODS 2030
26. Ejercer como instancia rectora del Sistema Nacional de Discapacidad - SND, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1145 de 2007.
27. Coordinar y articular a las instancias y actores que hacen parte del Consejo Nacional de Discapacidad -CND; establecido por la Ley 1145 de 2007 como organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
28. Coordinar y articular acciones para el establecimiento de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la inclusión social de personas con discapacidad y la implementación del Observatorio Nacional de Inclusión de Discapacidad.
29. Establecer, en coordinación con actores e instancias gubernamentales y no gubernamentales, privado, y sociedad civil, lineamientos y recomendaciones que permitan avanzar en un sistema de inclusión de las personas con discapacidad.
30. Coordinar con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional -APC, la gestión de recursos y apoyo técnico internacional, así como realización de alianzas público-privadas, que fortalezcan el diseño, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación política públicas y el desarrollo de planes. programas y proyectos para la inclusión de la población con discapacidad.
31. Coordinar y articular el desarrollo de estrategias de comunicación y difusión, que promuevan los principales logros, avances y desafíos en materia de inclusión, así como la visibilización de los talentos y capacidades de las personas con discapacidad.
32. Liderar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás instancias competentes, la representación del país en los escenarios e instancias internacionales respecto a derechos e inclusión de las personas con discapacidad y a compromisos internacionales asumidos por Colombia en la materia.
33. Coordinar la promoción y adopción del enfoque diferencial de discapacidad en las distintas políticas públicas, programas, observatorios y sistemas nacionales de información estadística en coordinación con las entidades competentes.
34. Coordinar y articular el seguimiento al cumplimiento de la normatividad actual en materia de inclusión de las personas con discapacidad y proponer ante las entidades competentes los ajustes pertinentes.
35. Coordinar con el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades competentes el diseño e implementación de estrategias que promuevan el acceso efectivo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a oferta institucional del Estado.
36. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente de la República y Vicepresidente y Ministro de la Familia.
37. Crear políticas públicas que garanticen la protección y el goce efectivo de los cuidadores de personas con discapacidad.
38. Formular programas de capacitación para que los cuidadores de personas en condición de discapacidad y/o un adulto mayor puedan generar ingresos económicos adicionales para su sostenimiento.
39. Formular programas, políticas y proyectos que garanticen la inclusión laboral de cuidadores de personas con discapacidad y adulto mayor.

**Parágrafo 1.** El Ministerio de Familia y de la Mujer tendrá a su cargo, además de las funciones previstas en la presente ley, el ejercicio de las atribuciones generales que corresponde ejercer a los Ministerios, de conformidad con la Ley 790 de 2002.

**Parágrafo 2.** Para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, facúltese al presidente de la República, para que, en un plazo máximo de seis meses, expida conjuntamente con el Ministro de Familia, las reglamentaciones que contengan los ajustes que se hagan necesarios para el buen funcionamiento del sector familia.

**ARTÍCULO 16. Modifíquese** el artículo 9° de la ley 1361 de 2009 la cual quedará así:

“ARTÍCULO 9o. OBSERVATORIO DE FAMILIA. Créese el Observatorio de Política de la Familia que permita conocer la estructura, necesidades, factores de riesgos, dinámicas familiares y calidad de vida, a fin de hacer el seguimiento a las políticas sociales encaminadas a su fortalecimiento y protección, así como al re direccionamiento de los recursos y acciones que mejoren su condición, unificando las estadísticas del sector familia y social. El Observatorio de Familia estará a cargo del Ministerio de Familia y de la Mujer y contará con la participación de la academia y la sociedad civil. Las entidades territoriales establecerán un Observatorio de Familia Regional y Municipal en las oficinas de Planeación o en las que se creen para cumplir esta función.”

**ARTÍCULO 17. EL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER**. Las demás entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de la Familia y de la Mujer, las determinará el Gobierno Nacional fundado en los principios de eficacia, racionalidad del gasto y gestión pública, según el grado de conexidad con la misión institucional de este ministerio.

**ARTÍCULO 18.** Para todos los efectos del cumplimiento de la presente ley, el Departamento Administrativo de la Función Pública adelantará los trámites y procedimientos necesarios para el traslado de la planta de personal de la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Dirección de Mujer Rural del Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, al Ministerio de la Familia y de la Mujer.

**Artículo 19.** De la planta de personal del Ministerio de Familia y de la Mujer. Continuidad de la Relación. De conformidad con la estructura prevista en la presente Ley, el Gobierno nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales señaladas en el artículo 189 y en la Ley 489 de 1998, procederá a asignar las funciones de sus dependencias y adecuar, de ser necesario, la planta de personal a la nueva naturaleza de la entidad.

Los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encontraban vinculados a la Consejería para la Equidad de la Mujer, a la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, a la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, quedarán automáticamente incorporados en la planta de personal del Ministerio de la Familia y de la Mujer.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Familia y de la Mujer tendrá una planta de personal global, que será distribuida mediante resolución, atendiendo a la estructura orgánica, las necesidades del servicio y la naturaleza de los cargos. Los empleos del Ministerio de Familia y de la Mujer se regirán bajo los lineamientos contenidos en la ley 909 de 2004.

**PARÁGRAFO.** El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales señaladas en el artículo 189 y en la Ley 489 de 1998, procederá a adoptar la estructura interna del Ministerio y adecuar, de ser necesario, la planta de personal a la nueva naturaleza de la Entidad.

**ARTÍCULO 20.**Los archivos de los cuales sea titular, la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, continuará siendo administrado y quedarán a nombre del Ministerio de la Familia y de la Mujer , de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la ley.

**ARTÍCULO 21. DE LA SUPRESIÓN Y FUSIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISMOS VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN, DEFENSA Y BIENESTAR DE LA FAMILIA y LA MUJER.** Autorícese al Gobierno Nacional para suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales que cumplan funciones en relación con la familia y la mujer afines a las del Ministerio de la Familia y de la Mujer, así como para reasignar las funciones de dichas entidades u organismos en este Ministerio. Para estos efectos, y para las adscripciones de las Entidades a que se refiere el siguiente artículo, el Gobierno Nacional efectuará los traslados presupuestales y adoptará las medidas fiscales necesarias para que el Ministerio de la Familia y de la Mujer pueda asumir a cabalidad las funciones que se le asignen.

**Artículo 22.** Modifíquese el artículo 17 de la ley 1444 de 2011 el cual quedará así:

**“**Artículo 17**.** Número, denominación, orden y precedencia de los Ministerios. El número de Ministerios es dieciocho. La denominación, orden y precedencia de los Ministerios es la siguiente:

1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Ministerio de Justicia y del Derecho.
5. Ministerio de Defensa Nacional.
6. **Ministerio de la Familia y de la Mujer**
7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
8. Ministerio de Salud y Protección Social.
9. Ministerio del Trabajo.
10. Ministerio de Minas y Energía.
11. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
12. Ministerio de Educación Nacional.
13. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
14. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
15. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
16. Ministerio de Transporte.
17. Ministerio de Cultura.
18. Ministerio del Deporte.”

**ARTÍCULO 23. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.** En un plazo no mayor a un año (1) a partir de la sanción de la presente ley el Ministerio deberá iniciar su funcionamiento y el Gobierno Nacional deberá hacer los ajustes necesarios al respecto.

**ARTÍCULO 24. VIGENCIA Y DEROGATORIA**. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas

**JUAN CARLOS WILLS OSPINA JUAN CARLOS RIVERA PEÑA**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**BUENAVENTURA LEÓN LEÓN ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**ALFREDO APE CUELLO BAUTE CIRO ANTONIO RODRIGUEZ PINZON**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D´ ARCE DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN JAIME FELIPE LOZADA POLANCO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**FELIX ALEJANDRO CHICA CORREA MARIA CRISTINA SOTO DE GOMEZ**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**YAMIL HERNANDO ARANA PADAUI EMETERIO JOSE MONTES CASTRO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**JOSE GUSTAVO PADILLA OROZCO JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**FELIPE ANDRES MUÑOS DELGADO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

1. **JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY**

La familia es el núcleo esencial de la sociedad, un bien de la humanidad que co-evoluciona con todos los demás sistemas sociales, participa como unidad activa en la dinámica social y requiere reconocimiento de su pleno protagonismo en la conservación constructiva de los individuos y de la sociedad. Por lo tanto, al invertir en la familia como unidad, se está propugnando por el desarrollo de las personas, las comunidades y el país, y se está garantizando el respeto de los derechos y la dignidad de las familias y con ello a la dignidad humana.

El objeto del Ministerio de la Familia y de la Mujer se enmarca en la obligación estatal y ciudadana de propender por el bienestar y velar por la integridad, supervivencia y conservación de la familia, premisa acorde con el sentir del constituyente de 1991 a la hora de regular de manera profunda la institución familiar y constituirla como el núcleo esencial de la sociedad.

En Colombia, existe una necesidad imperiosa de contar con una política de bienestar familiar y el cumplimiento de postulados constitucionales que clarifiquen el rol que desempeña el Estado en la vida de la familia como unidad, en la vida familiar de sus miembros como individuos y en el bienestar social, por lo anterior la historia constitucional colombiana, se ha caracterizado por avanzar conceptualmente en la protección de la familia como institución básica y fundante de la sociedad, se evidencia un avance importante en la materialización de la concepción de familia desde la Constitución del Estado Libre e independiente del Socorro, suscrita en 1810 hasta la constitución actualmente vigente de 1991. En la actualidad la Constitución Política[[1]](#footnote-1),brinda protección integral a la familia, en su artículo 42 sin discriminar su origen la erige como núcleo esencial de la sociedad, propugnando la honra, la dignidad y la intimidad de cada miembro. Prevé la igualdad de derechos y deberes de la familia y el respeto reciproco entre sus integrantes, donde se censura y se castiga toda forma de violencia intrafamiliar.

El bienestar integral de las familias, la protección constitucional y los avances legales frente a esta institución, deben representar una grado mínimo de conveniencia y adaptación a las realidades sociales , políticas y económicas del país, en consecuencia materializar la protección de la familia, postulado que se ha propugnado desde las raíces garantistas del estado social de derecho, debe enmarcar en su campo de acción y protección, a las diversas clases de familias que se han suscitado y reconocido en la actualidad.

La Constitución Política de Colombia, exige la igualdad de protección a las diversas formas de composición familiar, ya que el constituyente de 1991 determinó que “tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o  legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia”[[2]](#footnote-2). El Ministerio de la Familia y de la Mujer se encuentra armónicamente regulado con la jurisprudencia constitucional y los postulados de la Carta Superior, representando su contenido una verdadera progresividad de derechos fundamentales y sociales, protegiendo a todas las clases de familias existentes en Colombia.

La Corte Constitucional ha logrado estructurar desde la promulgación de la Constitución de 1991 hasta la actualidad, una línea jurisprudencial frente al concepto de familia que debe ser protegido por el Estado colombiano. Por este motivo el Ministerio de la Familia y de la Mujer reúne en su definición de familia los avances conceptuales que han sido desarrollados desde 1991 por la Corte Constitucional, y trasluce las características inherentes a ese concepto de familia. El ministerio edifica su definición de Familia, desde la sentencia T 523 de 1992 proferida por la Corte Constitucional, la cual señala:

* *La “familia es el ambiente y el paradigma de relación social primaria más adecuada para el desarrollo humano, por lo cual el estado debe brindarle toda su protección”[[3]](#footnote-3).*
* *El artículo 42 de la Constitución es la expresión de un acuerdo sobre lo fundamental de la familia en la visión del constituyente de 1991.*
* *Como bien corresponde a un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7 C.N.) no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan pues ellos pueden ser de carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce consecuencias a la voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones la familia legítima originaria en el matrimonio es hoy solo uno de los tipos posibles de familia.*
* *El constituyente consagro un espacio en condiciones de igualdad a las clases de familia, en desarrollo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución.*
* *Tanto el Estado como la sociedad garantizan a la familia una protección integral.*
* *La igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto reciproco entre todos sus integrantes constituyen los fundamentos esenciales de las relaciones familiares.*
* *Cualquier forma de violencia destruye la armonía y unidad de la familia y, en consecuencia, será sancionada conforme a la ley.*
* *Como núcleo fundamental de la sociedad, la familia tiene que cumplir ineludiblemente junto con la sociedad y el Estado deberes, tales como asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales prevalentes.*
* *Se manifiesta claramente en el ordenamiento Constitucional vigente la primacía de la familia como el ámbito natural dentro del cual deba realizarse el cuidado y preparación de la infancia.*
* *La unidad de la familia es presupuesto indispensable para la efectividad de derechos Constitucionales prevalentes de los niños.*
* *Los derechos de los miembros de la Familia veden ser compatibles con los intereses generales prevalentes tanto de la institución misma como de la sociedad colombiana que reconoce en ella su núcleo fundamental.*

De manera análoga el Ministerio de la Familia y de la Mujer, funda su accionar en los conceptos de familia emanados de la Corte Constitucional en las sentencias:

* T 090 de 1994 la Corte señala que “*las diferencias introducidas por la ley con fundamento en la diversa manera de conformar la familia, desconocen la Constitución. Siendo igualmente válido cualquier tipo de familia, las diferencias de trato resultan discriminatorias”.[[4]](#footnote-4)*
* En la sentencia T- 586 de 1999 señala que “a *la luz de la axiología constitucional, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio y las conformadas por fuera de éste, y que esta igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado”.*[[5]](#footnote-5)
* La Corte en la sentencia T 503 de 1999 con magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, hace énfasis, no solamente a proteger la familia como institución, si no a proteger al menor a tener una familia, y a no estar separado de esta, diciendo entonces que la familia es, más que una entre muchas formas de asociación, aquella reconocida por el Estado, sin discriminación alguna, como la institución básica de esta sociedad.
* C 271 de 2003, habla de la familia como la comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos
* Con la sentencia C- 075 de 2007, el precedente constitucional en materia de parejas homosexuales cambió, pues en esta sentencia la Corte decidió que el régimen patrimonial de la unión marital de hecho, previsto para las parejas heterosexuales, debía ser extendido a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.
* La sentencia C- 811 DE 2007 , *señala que “el derecho al libre desarrollo de la personalidad conlleva autonomía para los individuos en cuanto pueden adoptar la opción de vida que consideren, el Estado debe brindar las condiciones para su ejercicio disponiendo tratamientos jurídicos similares para todas las personas independientemente de la orientación sexual que ostenten, pues la diferencia de trato ante la ley basada exclusivamente en razón de la orientación sexual de las personas, como lo ha recordado esta corporación, implica la negación de la validez de su opción de vida y la sanción por el ejercicio de una alternativa legítima, que se deriva directamente de su derecho de autodeterminación y de su dignidad humana”.[[6]](#footnote-6)*
* Del mismo modo la sentencia T-716 de 2011 señala, *“el vínculo familiar se logra a partir de diversas situaciones de hecho, entre ellas, la libre voluntad de conformar la familia, al margen del sexo o la orientación de sus integrantes. Por lo tanto, resulta claro que la heterosexualidad o la diferencia de sexo entre la pareja, e incluso la existencia de una, no es un aspecto definitorio de la familia, ni menos un requisito para su reconocimiento constitucional”.[[7]](#footnote-7)*
* En la sentencia C 577 de 2011, el Tribunal dictaminó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos legales para fundar una familia, pero hay un “déficit de protección legal” para estas parejas bajo la ley actual, y ordenó al Congreso de eliminar ese déficit desde el 20 de junio del 2013.
* En Sentencia C-238 de 22 de marzo de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se avanzó en el concepto de *familia,* cuando se precisó: *“El elemento que confiere identidad a la familia no es la heterosexualidad o la consanguinidad, sino el afecto que da lugar a su existencia, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad y en la conformación de una unidad de vida o de destino que liga íntegramente a sus miembros más próximos*”.
* La sentencia C 606 de 2013 señala que en el proceso de construcción de la Constitución que nos rige se indicó que “*tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia”.[[8]](#footnote-8)*
* El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación interna 31252, Exp. 19001233100020010075701 de 11 de julio de 2013, C.P. Eduardo Gil Botero. *“La familia no solo se estructura de forma horizontal sino también a nivel vertical, es decir, que no solo surge de vínculos jurídicos o naturales entre dos personas heterosexuales (nuclear) sino monoparental, extensiva o de crianza. Por vínculos de amor, afecto, respeto y solidaridad”[[9]](#footnote-9).*

A partir de las diversas formas de conformación de la familia, en referencia con las sentencias citadas de la anterior reseña de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el Ministerio de la Familia y de la Mujer pretende la protección integral de las diversas formas de familia reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, donde los valores y principios constitucionales como hoja de ruta de su accionar.

De igual forma, existe la necesidad de brindar apoyo a las familias a partir de sus características, considerando que estas son diversas y se componen de integrantes con diferentes características y necesidades, es por esto que el accionar del estado frente a la protección familiar , debe basarse en un verdadero sistema de acciones afirmativas con enfoque diferencial, enmarcado en el principio de igualdad y no discriminación , donde se orienta el reconocimiento de derecho a aquellos colectivos, grupos o personas y familias que han sido vulneradas social, cultural, por su género, pertenencia étnica, discapacidad o por situaciones como el conflicto armado.

“*Las familias son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad. Familias fuertes, saludables y sostenibles, derivan en sociedades fuertes, saludables y sostenibles*”.[[10]](#footnote-10) Por el contrario, un debilitamiento de las estructuras y dinámicas familiares impacta  desfavorablemente en la sociedad, al provocar  problemáticas que afectan los indicadores de bienestar en  los miembros de los hogares, especialmente de aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Cuando los indicadores de bienestar se deterioran a nivel familiar produciendo desatenciones en el cuidado de los niños, abandono escolar, aumento de adicciones, violencia intrafamiliar, entre otros, el Estado debe responder con programas y proyectos que mitiguen las diversas problemáticas, las cuales pudieron evitarse o reducirse con una atención y protección oportunas a las familias especialmente vulnerables.

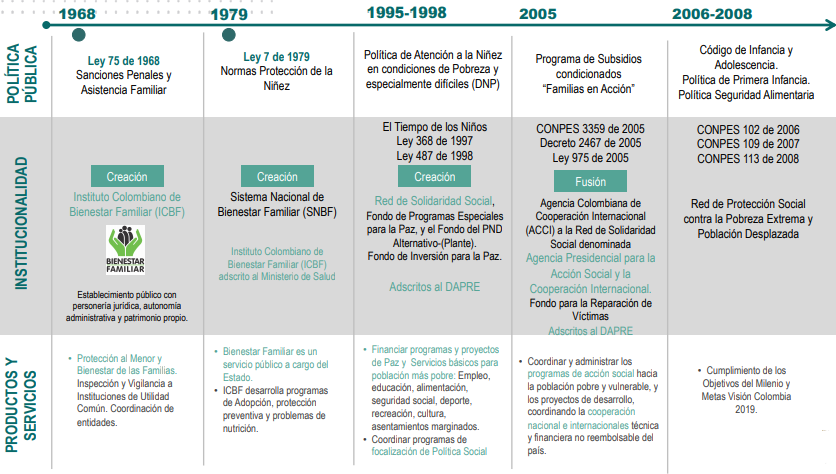
En cuanto institución garante de la protección de los miembros de la sociedad, la familia es objeto jurídico de estudio y de intervención. En esta breve introducción queremos hacer referencia a la forma como interactúa la familia en cuanto institución social con el sistema jurídico que regula su conformación, las relaciones, los deberes y los derechos de sus miembros entre sí y con la sociedad. Como institución, la familia se organiza a partir de un sistema de normas y además cumple con las siguientes funciones que la sociedad le ha delegado:

1. El funcionamiento biológico de los individuos.
2. La reproducción de sus miembros.
3. Su adecuada socialización.
4. La provisión y distribución de los bienes y servicios.
5. El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto del sistema social.
6. La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar la supervivencia individual y la del grupo.

Consideramos fundamental fortalecer a la familia mediante la formulación de políticas sociales, ya que la Constitución Nacional, la Jurisprudencia, doctrina y costumbre, consideran la familia como el núcleo esencial de la sociedad, además se ha delegado en la familia la responsabilidad de satisfacer los derechos básicos de los individuos.

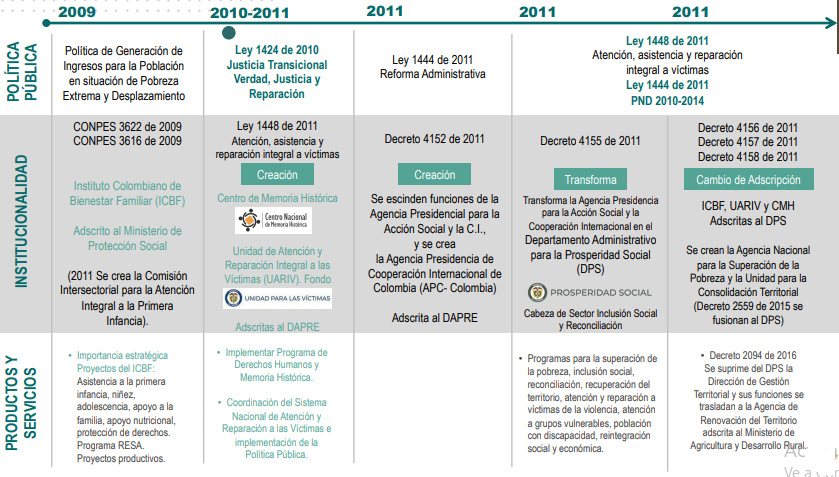
En Colombia se ha desarrollado desde los años 60 políticas públicas direccionadas a la protección de la familia, premiando la inclusión social, buscando atacar frontalmente las problemáticas sociales que afectan a la familia y atender de manera oportuna problemáticas asociadas con la niñez, la pobreza extrema, adopción, nutrición, paz y posconflicto, derechos humanos, población con discapacidad, adulto mayor, consolidación territorial, desplazamiento forzado, etnias y género. Estas políticas han sido desarrolladas históricamente por entidades que han sido fruto del desarrollo normativo del país.

Grafica 1. Avance histórico sector de la inclusión social



Fuente: Función Pública, organigrama sector de la inclusión social y reconciliación

Grafica 2. Avance histórico sector de la inclusión social

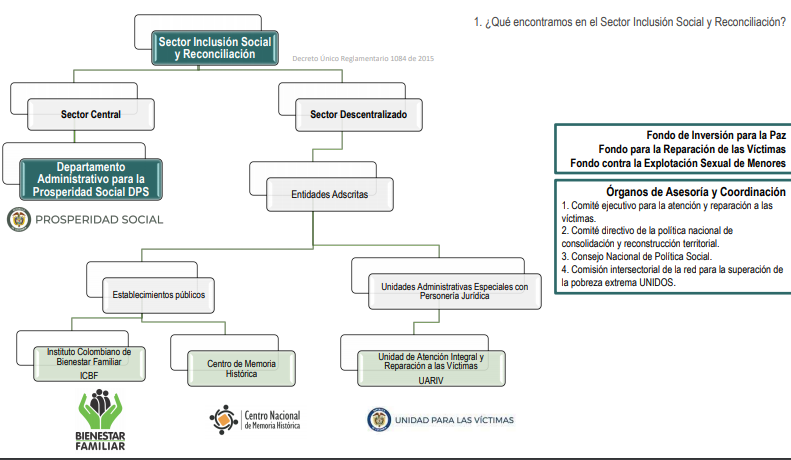


Fuente: Función Pública, organigrama sector de la inclusión social y reconciliación

Teniendo en cuenta las dinámicas familiares, las condiciones socioeconómicas de las familias y las problemáticas suscitadas por la falta de intervención estatal en las interacciones intrafamiliares, surge en la estructura de la administración publica el Departamento Para la Prosperidad Social acompañado por entidades adscritas de apoyo y gestión como el ICBF, CNMH y la Unidad de Victimas, como una solución clara de desarrollo de políticas públicas de inclusión social. A pesar de esto, la familia no representa uno de los mayores focos de acción institucional.

Asimismo el Gobierno nacional, posterior a la promulgación de la ley 1448 de 2011 en el marco de justicia transicional, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio frente a la atención a las víctimas, efectúa la transformación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el DPS , “*encargado de fijar las políticas, planes generales , programas y proyectos para la asistencia , atención y reparación a víctimas de la violencia , la inclusión social , atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica*”.[[11]](#footnote-11)

Grafica. Organigrama sector de la Inclusión Social



Fuente: Función pública, Análisis sector de la inclusión social y reconciliación, 2018.

A pesar del esfuerzo del gobierno nacional de articular un sistema de protección a las familias en todos sus ámbitos, y asegurar el goce efectivo de los derechos a cada uno de sus integrantes, en la actualidad la familia padece de múltiples problemáticas que no se pueden ocultar como lo son la desescolarización , la violencia intrafamiliar, la desnutrición, el desempleo , la pobreza, abuso sexual de menores, el consumo de sustancias psicoactiva, desprotección de integrantes con discapacidad, violencia contra la mujer, entre otros , que reflejan la falta de atención a las familias por parte de las instituciones encargadas de su protección.

Aspectos que también debemos tener en cuenta es que actualmente la familia padece de problemas socioeconómicos que condicionan la vida familiar, asumiendo que las estadísticas simplemente ratifican la observación cotidiana de la pauperización de la población. Sin embargo, este papel de socialización es compartido por otros entes: “A la familia se le ha delegado en primera instancia el papel de mediadora, entre el individuo y la sociedad, para lograr su integración en la dinámica social y cultural; en segunda instancia le corresponde dar continuidad al proceso de socialización a la escuela y posteriormente a diferentes grupos sociales en los que interactúe”.

Los aportes teóricos que plantean que la familia está sufriendo una diversidad de transformaciones, establecen que las causales de dicho cambio son las condiciones económicas, políticas, legales y administrativas que se han configurado en el país durante los últimos años. Específicamente, es claro que a lo largo del siglo XX las estructuras y dinámicas familiares se han venido transformando. Se ha pasado de un modelo de familia tradicional conformado por padre, madre e hijos, a un espectro más amplio que incluye diversas formas de composición familiar.

Así mismo, los lazos con la familia extensa se han hecho más fuertes al surgir la necesidad de acoger a las madres solteras o cabeza de familia que no tienen recursos para cuidar de sus hijos; así “muchas madres y padres mayores que creían que su misión procreativa había culminado, han tenido que reacomodar su hogar para recibir a sus hijos, sus nietos, nietas, sobrinas, etc. La familia como red de apoyo ha demostrado así su relevancia, al permitir la supervivencia de los padres y sus hijos y tomar como responsabilidad familiar el cuidado de niños de varias generaciones.

Con respecto al cambio de roles de género y su impacto familiar y social, el cambio de rol de la mujer, transforma la dinámica familiar y la convierte en la proveedora económica, sin que se hubiera dado una re-distribución de tareas del hogar. Esto a su vez sobrecargó a la mujer, y en este sentido el Estado no ha podido garantizar el apoyo a la familia.

El impacto de las transformaciones sociales sobre la familia ha repercutido en la estructura misma de la familia actual. Los factores de cambio que podemos reconocer se relacionan con:

* Procesos de urbanización y migración y las estructuras demográficas emergentes.
* Incremento de población con necesidades básicas insatisfechas y/o en situación de pobreza.
* Narcotráfico y violencia organizada.
* Vinculación de la mujer al sector formal e informal de la economía.
* Cambios en las relaciones de género.
* Cambios del sistema de valores tradicionales.

Adicionalmente, la convivencia familiar se ha complicado, debido a la dinámica de vértigo que se ha apoderado del accionar social, a la transformación defectuosamente asimilada de las escalas de valores que surgen de dicho accionar, a la aparición de nuevas valoraciones culturales que implican a su vez nuevas relaciones espaciales y temporales de los integrantes de la familia como producto de las inestables condiciones laborales que se han implantado en nuestros escenarios sociales; factores estos que se agravan al sumarse los frecuentes acontecimientos de agresión social y hogareña que necesariamente implican grandes dosis de aislamiento y de desvalorización de las relaciones que acontecen al interior de las familias.

En este sentido, se puede hablar de múltiples tipos de violencia: la propiciada por los grupos armados, la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar contra los niños, mujeres, hijos o miembros homosexuales, ancianos, personas en condición de discapacidad, por la situación socioeconómica adversa a la que se ven enfrentadas muchas familias, lo cual repercute de forma directa en las transformaciones que está viviendo el propio núcleo familiar.

Frente a la violencia intrafamiliar, consideramos que en los últimos años se ha incrementado a propósito de los cambios en el papel de la mujer dentro del hogar y al reclamo violento de la posición del hombre, la violencia asume diferentes expresiones según los estratos sociales y posiblemente, según las regiones del país. Se caracteriza por la variedad de modalidades de agresión física, sexual y psicológica que llegan a producir lesiones permanentes y en casos agravados la muerte. Violencia que puede ser esporádica, pero que en muchos hogares se constituye en algo normal, un régimen de terror cotidiano ante el cual mujeres, niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad, es decir los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, no logran romper la dependencia con su agresor, ni el proceso de dominación ejercido mediante la violencia. Estamos hablando de un tipo de violencia que se da a puerta cerrada, dentro de la intimidad inviolable del hogar, bajo la mirada tolerante de la sociedad.

De acuerdo con cifras entregadas por Medicina Legal y expuestas por Caracol Radio, solo en la ciudad de Bogotá se ha presentado un aumento de violencias contra la mujer del 3.5%, en el último año.

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no ha hecho sino aumentar en los últimos tres años, esto se traduce en que en el 2018 cada día fueron abusados 64 niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años, uno cada 22 minutos; en cuanto a los criminales que perpetraron estos delitos, cerca de 10.963 eran familiares de la víctima, lo que se corresponde con el 44 por ciento del total de los registros. De estos, algo menos de 5.000 fueron los padres o padrastros de los menores; 1.697, los tíos y 1.034, los abuelos, lo que demuestra que el abuso sexual en Colombia en asunto familiar. Durante el 2018, en Bogotá se presentaron 4.155 casos de violencia contra los menores de edad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), seguido por el Valle del Cauca, con 1.900 casos, y Cundinamarca, que suma 1.069. El caso más reciente se dio el día 1 de marzo de 2019, cuando una niña de tan solo 3 años de edad en la ciudad de Bogotá fue víctima de violencia intrafamiliar, dejando como resultado la muerte de la menor.

**Según el instituto de Medicina Legal, en el año 2018 se presentó 103.481 casos de violencia de género, entre las que se destaca la violencia perpetrada por la pareja**con 35.894 casos, seguida de la violencia intrafamiliar con 33.372 casos.

Un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre reveló que en 2018 se han registrado al menos 3.014 casos de violencia de género contra la mujer en Colombia: es decir alrededor de 50 casos por día.

“La Fiscalía General de la Nación, desde 1º de enero a 10 de octubre de 2018, registró un total de 70.603 procesos por violencia intrafamiliar, de los cuales 56.570 casos están activos y 14.033 inactivos”[[12]](#footnote-12). La mayoría de están investigaciones están concentradas en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca

Por su parte, la Secretaría Social reveló que, en el 2018, las comisarías de familia recibieron 1053 denuncias por casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, es decir, en promedio 100 denuncias mensuales por casos de abuso contra menores.

En el año 2017 Medicina Legal reporto la existencia de 27.538 casos de violencia intrafamiliar en el país, con una tasa de 55,87 casos por cada 100.000 habitantes.

Estos datos demuestran la falta de institucionalización, medidas y políticas enfocadas a garantizar la protección integral de la familia, protección que abarca tanto el aspecto material como el moral y la armonía familiar, indispensables en la subsistencia y necesaria para la convivencia pacífica dentro del entorno social, garantizando la protección, emprendimiento y formación integral de la familia.

Los cambios que está sufriendo actualmente el núcleo familiar como el machismo, la discriminación, el alcoholismo, el maltrato infantil, la desintegración del núcleo familiar por violencia, la falta de educación sexual y la llamada crisis de valores, hacen que no se logre una estabilidad en el núcleo familiar y que estos problemas se repitan con especial persistencia.

Al parecer las acciones violentas son el resultado de aprendizajes culturales y por tanto existe la posibilidad de modificarlas. Es a través de políticas públicas y un Estado comprometido en entregarle a la sociedad un Ministerio de Familia y de la Mujer que consolide la institución familiar, la promoción y el desarrollo integral y equitativo de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades, equipado con todas las herramientas jurídicas y legales, que le permita a la familia encontrar el apoyo, acompañamiento y solución a los fenómenos de desintegración familiar. Se buscará lograr un cambio necesario para formación de familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros sin distingo de edad, género, cultura, o capacidad física o intelectual.

Consideramos que es indispensable incluir a la familia en la formulación de las políticas públicas porque la Constitución Nacional en su art. 42 y la tradición social consideran la familia como la unidad básica de la sociedad. El Estado y la sociedad han delegado en la familia la responsabilidad de satisfacer los derechos básicos de los individuos y admiten su corresponsabilidad en la garantía de tales derechos, y en esa medida debe haber entre ellos relaciones complementarias y de cooperación.

La familia sigue teniendo un papel de mediación entre sus miembros, la sociedad y el Estado en las funciones de supervivencia, socialización y desarrollo de los individuos, aun cuando comparta esas responsabilidades con las demás instituciones sociales (educativa, de salud, laboral, económica, etc.). En este sentido, el propósito del Ministerio se orientará a la protección integral de la familia, a través de la formulación e implementación de políticas en coordinación con los entes u organismos estatales que promueven y acompañan el bienestar de las familias.

El país está en mora de tener una política que promueva el bienestar del núcleo familiar, de los diferentes tipos de familias, que clarifique el papel que desempeña el Estado en la vida de la familia como unidad, en la vida familiar de sus miembros como individuos y en el bienestar social del grupo y de sus miembros.

A pesar de las millonarias inversiones en programas sociales, actualmente la familia colombiana padece de distintas problemáticas como el aumento de los niveles de pobreza como lo indico el DANE en el año 2017, la desigualdad, el desempleo, falta de atención en salud, inequidad de género, violencia intrafamiliar.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que en Colombia existen problemáticas profundas frente al precario desarrollo de las dinámicas familiares, lo que demuestra el insuficiente desarrollo institucional y legal del sector de la familia. A causa de esto es necesario cubrir de manera eficaz la demanda de necesidades sociales y económicas de las familias colombianas, en consecuencia, se debe promover la creación de un órgano rector que garantice el goce efectivo de derechos de las familias y que efectivamente desarrolle políticas de familia de manera integral y articulada, evitando vicios interinstitucionales de gestión como la duplicidad de funciones.

Es preocupante la actualidad de las familias en el país, teniendo en cuenta las diversas problemáticas que afectan a sus integrantes y en especial aquellos que deben ser sujetos de verdaderas acciones afirmativas que respeten su dignidad, la atención individual y especializada. La acción institucional vigente es precaria a la hora de fomentar y aplicar políticas públicas de bienestar social.

La creación del Ministerio de la Familia y de la Mujer, solucionará la desarticulación institucional de entidades que se dedican a la protección de la familia, promoviendo la transparencia, la racionalización, la eficacia, economía, responsabilidad y coordinación de sus entidades. Esta medida solucionará problemas de planeación y fortalecerá la función pública y administrativa, en el sector social, asegurando el bienestar, acompañamiento, asesoría y protección de la familia.

El Ministerio de la Familia y de la Mujer mediante su estructura institucional reducirá las brechas sociales existentes en las familias colombianas, generando desarrollo urbano y rural, fortaleciendo la presencia institucional del Estado en cada departamento del país. La focalización de recursos en el Ministerio de la Familia y de la Mujer generará reorganización institucional que fortalecerá el accionar estatal.

En Colombia, no existe actualmente una institución que regule, formule, adopte, dirija, coordine, inspeccione, controle y ejecute política pública, planes, programas y proyectos en materia de la familia, lo que ha generado una desprotección universal al núcleo esencial de la sociedad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social, son entidades encargadas tanto de la protección de la familia, como de la protección del sector de la inclusión social en el país. Sin embargo, su accionar es precario y especifico, frente a la protección integral de la familia y cada uno de sus integrantes. El DPS, a pesar de ejecutar algunos programas de protección de la familia, en su estructura carece de funciones que protejan, ejecuten y promuevan políticas públicas de protección familiar, asimismo este Departamento Administrativo se caracteriza por tener sobrecarga de funciones, ya que es la cabeza del sector social y la reconciliación lo cual no permite, desarrollar una protección eficiente y eficaz de las pocas funciones enfocadas a la familia colombiana.

La protección estatal de los niños, niñas, adolecentes, mujer, adulto mayor, personas con discapacidad y sus cuidadores, entre otros en el contexto familiar, se caracteriza por la desarticulación funcional y falta de regulación general, ya que si bien es cierto existen sistemas de protección en cabeza de algunas entidades del estado, ninguna de estas tiene por objeto principal brindar apoyo especial a esta población, lo que genera desprotección. Por ende, el Ministerio de la Familia y de la Mujer, sería el órgano que agrupara todos los sectores y funciones de protección familiar que actualmente se encuentran dispersas y en cabeza de entidades que poco o nada tienen que ver con la protección de la familia.

La creación del Ministerio de la Familia y de la Mujer es fundamental para lograr avances significativos, en la protección familiar y la articulación institucional del sector social en el país, progreso evidenciado en países del mundo que fomentaron la institucionalización de la familia como medio de protección global, como Italia, Panamá, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Rumania, Turquía, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Chile y Paraguay.

Al igual que la familia, la mujer cumple un papel preponderante en la sociedad y es reconocida como sujeto de protección reforzada al interior de nuestro Cuerpo normativo constitucional. En consecuencia, no se encuentra en la misma situación constitucional que el hombre, que, si bien es un sujeto de protección constitucional, su protección no es especial ni reforzada.

Con el propósito de dar cumplimiento al anterior mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos de la mujer de manera especial y reforzada , la misma Constitución , los tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional ; han determinado el uso de “ acciones afirmativas “ medidas estas en pro de ciertas personas o grupos de especial protección, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos, sin que ello apareje una violación del artículo 13 de la Carta.

No hay duda alguna de que la mujer ha padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo. Aun cuando hoy, por lo menos formalmente, se reconoce igualdad entre hombres y mujeres, no se puede desconocer que para ello las mujeres han tenido que recorrer un largo camino.

A este propósito de reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer se sumó también el constituyente de 1991. Por primera vez, en nuestro ordenamiento superior se reconoció expresamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.

Hacer parte del género al que pertenecen las mujeres, contó con especial deferencia por parte de Constituyente de 1991. Éste conocedor de las desventajas vividas por la mujer, optó por privilegiarla de manera clara, pensando en equilibrar la situación en que se encontraban y en aumentar su protección a la luz de aparato estatal.

Por consiguiente, la mujer es sujeto constitucional de especial protección y en esa medida sus derechos deben ser protegidos mediante acciones afirmativas. A pesar de esto, en Colombia no existe una protección clara hacia la mujer, ya que se evidencia que día a día se presentan casos de violación de sus derechos en el entorno familiar.

La mujer requiere de atención fija por parte de todo el poder público. sí pues, lo que doctrinalmente se ha denominado “acciones afirmativas” fue expresamente permitido en la Carta para que el legislador pudiera adoptar medidas en pro de ciertas personas o grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos, sin que ello comportara una violación del artículo 13 de la Carta. Dichas medidas se concretan en la facultad con la que cuenta el legislador para apelar a la raza, al sexo –categorías en principio sospechosas como criterio de discriminación-, con el fin de aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esos grupos en posiciones desfavorables. Ahora bien, las medidas –por obvias razones- no pueden servir sino al fin para el cual han sido ideadas; es decir, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades.

En Colombia actualmente no existen políticas serias y eficaces encaminadas a la protección de la mujer, ni entidades que la protejan en los diversos contextos sociales de forma integral, en consecuencia, el Ministerio de la Familia y la Mujer será el ente rector encargado de definir lineamientos de protección que mitiguen las necesidades de la mujer colombiana.

Por medio del Ministerio de la Familia y de la Mujer se garantizará el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, en cada una de sus facetas, asegurando su desarrollo intelectual, afectivo, social, cultural, político, etc. ; se garantizará las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales especificados en el artículo 44 de la Constitución Política, como la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre , nacionalidad , a tener una familia, a no ser separado de ella, a el cuidado y el amor; protección frente a condiciones que amenacen el desarrollo armónico de la familia como lo es la drogadicción, prostitución, la violencia física y psicológica, la explotación económica, el abuso sexual entre otros ; el equilibrio de derechos de los familiares, prevaleciendo el de aquellos integrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad manifiesta; un ambiente familiar apto para el desarrollo de los menores de edad.

El Ministerio de la Familia y de la Mujer, se constituirá como la herramienta estatal ideal, para lograr la materialización de los postulados constitucionales frente a la protección de la familia y el goce de sus derechos fundamentales y sociales, además de aportar de manera sistemática e integral en el aumento de la calidad de vida de las familias colombianas. Sera el ente integrador de las políticas, planes, funciones y proyectos dirigidos a la protección de la familia en Colombia.

De los Honorables Congresistas

**JUAN CARLOS WILLS OSPINA JUAN CARLOS RIVERA PEÑA**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**BUENAVENTURA LEÓN LEÓN ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**ALFREDO APE CUELLO BAUTE CIRO ANTONIO RODRIGUEZ PINZON**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D´ ARCE DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN JAIME FELIPE LOZADA POLANCO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**FELIX ALEJANDRO CHICA CORREA MARIA CRISTINA SOTO DE GOMEZ**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**YAMIL HERNANDO ARANA PADAUI EMETERIO JOSE MONTES CASTRO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**JOSE GUSTAVO PADILLA OROZCO JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA REPRESENTANTE A LA CAMARA**

**FELIPE ANDRES MUÑOS DELGADO**

**REPRESENTANTE A LA CAMARA**

1. Constitución política de Colombia [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Constitucional de Colombia. T-606 de 2013 y T-070 de 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Constitucional. T 523 DE 1992 [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Constitucional. T 090 DE 1994. Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Constitucional. T 586 DE 1999. Magistrado ponente Vladimiro Naranjo [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Constitucional. C 811 de 2007. Magistrado ponente. Marco Gerardo Monroy Cabra [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte Constitucional. T -716 DE 2011. Magistrado ponente. Luis Ernesto Vargas Silva [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Constitucional. T 606 DE 2013. Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos [↑](#footnote-ref-8)
9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación interna 31252, Exp. 19001233100020010075701 de 11 de julio de 2013, C.P. Eduardo Gil Botero [↑](#footnote-ref-9)
10. Ignasi de Bofarull, Instituto de Estudios Superiores de la Familia, Universidad Internacional de Cataluña. [↑](#footnote-ref-10)
11. WWW. Prosperidadsocial.gov.co [↑](#footnote-ref-11)
12. Datos obtenidos del SPOA en consulta del 10 de octubre de 2018, remitidos por la Fiscalía General de la Nación en oficio con número de ORFEO 20182000005531 de 1 de noviembre de 2018 [↑](#footnote-ref-12)